

V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.

Mesa J 40

Nuevas tendencias políticas, sociales y económicas en América Latina

Coordinadoras:

Angela Oyhandy (UNLP)
María Antonia Muñoz
(FLACSO México / Universidad Pompeu Fabra)

Ponencia: La protesta social en los noventa en Argentina

Agustín Santella (IIGG, UBA, CONICET)
agustinsantella@gmail.com

RESUMEN

En esta ponencia nos proponemos presentar las líneas principales que tomaron las protestas populares frente a la reestructuración capitalista en la década de los noventa. Para ello, primero realizamos una introducción histórica a la evolución de la protesta laboral a partir de series disponibles a lo largo del siglo. En segundo lugar, damos cuenta de la variación cuantitativa y cualitativa de las protestas de trabajadores en el inicio de la década en cuestión. En la parte final, nos proponemos complementar los estudios realizados por otros autores con la consideración de las huelgas generales como forma articuladora tanto social como política.

La protesta social en los noventa en Argentina

En el análisis de la conflictividad social en el período 1990-2005 se pueden señalar dos grandes momentos. Por un lado se observa una pronunciada caída de la actividad huelguística y la aparición de la protesta de los trabajadores desocupados, la cual preponderó en ciertos años en el conjunto de las protestas populares, especialmente en 2002 cuando la recesión económica tuvo mayor impacto. Sin embargo, esta tendencia se revierte parcialmente con la salida de la crisis. Aunque no se dispone de mediciones certeras sobre conflictividad para largos períodos de tiempo, los datos reunidos parecen indicar que con la ola de huelgas de 2005 y 2006, el movimiento huelguístico vuelve a niveles comparables, pero todavía menores, a otros momentos históricos de alta movilización huelguística. Con esta ola de huelgas se retoma el “repertorio clásico” del movimiento obrero, manifestando una pronunciada disminución de las formas de protesta que estuvieran asociadas a los movimientos de desocupados en un momento anterior. Aunque en el conjunto de las huelgas de 2005-2006 el sector industrial se muestra menos propenso al conflicto, esta ola implica para el sector automotriz una alta movilización huelguística, si lo comparamos con la conflictividad en el sector en el período 1989-2006. En este sentido, la recuperación económica, los cambios en el mercado de trabajo y la situación política trajeron una reanimación de la conflictividad en los trabajadores industriales, cuya capacidad de protesta había sido la más afectada en los años 90.

Algunos registros para una perspectiva histórica

Uno de los principales problemas para obtener una visión general de las huelgas en Argentina es la falta de información estadística. La diferencia entre fuentes, el alcance geográfico de los registros, hacen casi imposible la construcción de series de largo plazo (Iñigo Carrera 2007, p. 62). McGuire (1996) ha publicado un exhaustivo relevamiento de las fuentes estadísticas históricas disponibles. La única serie continua abarca los años 1907 a 1972, pero restringida a la Capital Federal. Este registro, realizado por dependencias del Ministerio de Trabajo, excluía los conflictos laborales del resto del país, así como del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Provincia. El artículo señala que entre 1961 y 1972 se dejaron de lado inclusive los paros (interrupciones del trabajo entre 15 minutos y 24 horas), huelgas de brazos caídos,

trabajo a desgano y trabajo a reglamento. Asimismo, en base a comparaciones con similares tipos de fuentes en otros países, el autor presume que este tipo de registros subestimarían la cantidad real de conflictos laborales en la misma Capital Federal. Posteriormente el Ministerio retomaría la estadística de conflictos extendiendo la muestra a nivel nacional entre 1973-1975 (en rigor, se extendió al Gran Buenos Aires y Córdoba) y 1987 (p. 131-132). En 1998-2001, y finalmente, con la recuperación del conflicto laboral hacia 2005 se inició una nueva construcción de datos por parte del Ministerio, esta vez con más indicadores (MTEySS, 2006, 2007).

Como señala McGuire, distintos investigadores construyeron estadísticas con base demográfica para períodos separados (1887-1907, 1930-1943, 1955-1972, 1973-1976, 1976-1980). El mismo McGuire elaboró una serie de 1984-1993 en base a la recolección de huelgas del Consejo Técnico de Investigadores, publicados anualmente en *Tendencias Económicas y Financieras*. Encontramos que esta consultora comienza con el registro anual de huelgas y huelguistas por mes y sector o empresa donde se realizó la huelga, desde 1980 en forma continua hasta 2008. Para los años 90, entretanto, se sumaron distintas consultoras y grupos de investigación en la construcción de series de protestas sociales que incluyeron huelgas (Nueva Mayoría, CICI, PIMSA, GESPAC, ver Atzeni y Ghigliani 2008, MTEySS 2006, Schuster et al., 2006). Sin poder reemplazar la construcción de una serie continua de conflictos laborales, como la realizada por el Ministerio de Trabajo entre 1907 y 1972, encontramos un registro global sobre protestas laborales realizado dentro de un proyecto comparativo internacional. El World Labor Group (WLG) construyó una base de protestas laborales en el mundo desde 1870 hasta 1996, incluyendo la Argentina (Silver, 2005). Este registro da un indicio para la construcción una serie de “protestas laborales” en el largo plazo en la Argentina. “Protesta laboral” es definida como todo evento u acción realizada por trabajadores proletarizados o en vías de proletarización. “Para resumir, la conflictividad laboral que pretendemos medir incluye todas las resistencias y reacciones (observables) de los seres humanos a verse tratados como mercancías, tanto en el lugar de producción como en el mercado de trabajo. Incluye todos los actos manifiestos de resistencia conscientemente proyectados y también formas ocultas de resistencia cuando se trata de prácticas colectivas generalizadas. Finalmente, el concepto de conflictividad laboral incluye todos los actos de los trabajadores que se presentan bajo banderas comunales distintas a las del trabajo, cuando existe un claro solapamiento entre clase y comunidad, y cuando la lucha está

encaminada a oponerse a la condición proletaria” (Silver 2005, p. 210). El espectro de protestas laborales se amplía considerablemente por fuera de las huelgas. Esto le lleva al WLG a considerar las fuentes hemerográficas y no la estadística oficial sobre huelgas, más ajustado a observar la conflictividad laboral en su conjunto. “La suposición (muy habitual) de que las huelgas pueden servir como indicador fiable de todas las formas de conflictividad laboral es inaceptable y potencialmente muy equívoca” (p. 211). Inclusive, la estadística oficial de huelgas excluye a las huelgas generales pero “los trabajadores plantean con frecuencia sus reivindicaciones al Estado (mediante huelgas políticas) como parte de su resistencia frente a la condición proletaria”. La autora considera, además, que la estadística de huelgas es insuficiente para el estudio de la protesta a nivel mundial ya que muy pocos países tienen estadísticas confiables o completas (corroborado en el caso argentino). Consecuentemente, el registro de las protestas incluye a trabajadores ocupados como desocupados, y los tipos de acción van desde las huelgas generales, huelgas, a disturbios, protestas de desempleados, manifestaciones, cierres patronales, otras formas de resistencia u otras acciones (pp. 221-226).

Con este marco, Korzeniewicz (1995) ofrece un registro de protestas laborales en la Argentina desde 1906 hasta 1990. Los casos sobre Argentina provienen de la misma base del WLG. De un total de 91.947 menciones de protestas laborales para todo el mundo en los diarios *The New York Times* y *The Times* (Londres) correspondieron a la Argentina 2319 (el 2,5%) (Silver 2005, p. 215, Korzeniewicz 1995, p. 114). En la evolución de la protesta laboral en Argentina dos grandes momentos llaman la atención (datos expuestos en una gráfica por Korzeniewicz). El primero son los años de la Semana Trágica de 1919. El segundo incluye protestas bajo los primeros gobiernos peronistas y el pico máximo se inscribe en los años 1958-1959. A partir de allí descienden las protestas con una leve reaparición en el ciclo de Cordobazo (1969-1975). El comportamiento en el tiempo de la protesta en la Argentina ofrece una combinación entre los comportamientos de los países centrales y periféricos. Los dos grandes picos de conflictividad laboral mundial se asocian a la finalización de las Guerras Mundiales (1919-1921 y 1946-1948). Esto se debe al peso de la protesta laboral de los países centrales fuertemente vinculado al desenlace de estas guerras. Como vemos, esto también ocurre en la Argentina pero tan sólo en el desenlace de la Primera Guerra. Pero el segundo pico en la Argentina se asocia al ascenso de la conflictividad hacia fines de los cincuenta, que coincide *grosso modo* con el ascenso de la protesta laboral en los

países periféricos cuando ya la conflictividad en los centrales tendía a descender paulatinamente. En la periferia se observarán dos picos entre 1955 y 1960 y alrededor de 1985 (Figuras en Silver 2005, pp. 145-147).

El sentido de la expansión de la protesta laboral a la periferia sigue una de las tesis centrales de Silver. Esta sostiene una interrelación recíproca entre movilidad del capital y protesta, mediante la cual el desarrollo del capital trae una fase de conflicto que se resuelve con la innovación tecnológica, concesiones al trabajo por un lado, pero también con movilidad del capital a zonas geográficas y nuevas ramas. Esto origina una nueva fase de protesta en estas regiones y ramas de inversión reciente, y daría cuenta de la continuidad de la protesta laboral por fuera de las metrópolis hacia 1980 en países que fueron objeto de la relocalización industrial luego de la crisis de los años 70 (Brasil y Asia) (Arrighi y Silver, 2000; Frobel, Heinrichs y Kreye, 1978). Este tipo de expansión del capital en la Argentina puede verse en el análisis que hace del sector automotriz. La protesta obrera en este sector se inicia en los países metropolitanos (EE. UU., Canadá), se extiende hacia el resto de la Europa industrial, hacia 1970 llega a Italia, España, Argentina y hacia 1980 a Brasil, Sudáfrica, Corea del sur y México (Silver 2005, pp. 58-59). Esto corrobora el sentido del flujo de inversiones internacionales en el sector¹.

En cuanto a la Argentina, Korzeniewiz agrupó las acciones en “olas de protesta”. Como se ve en el cuadro respectivo, las principales olas caen en los años 1951, 1957-1958, 1969 y 1975. Siguiendo un criterio extendido, el autor entiende por olas aquellos años “donde el número de menciones es al menos el 50% más alto que el promedio de los previos cinco años y (grandes olas) el número de menciones es más alto que el promedio de los 85 años de serie en su conjunto” (p. 111). En los años 1980 se protagonizaron olas de protesta, pero en la perspectiva histórica de largo plazo fueron mucho menores que las de 1975, y mucho mayores comparadas con las de 1956-1957.

A pesar que la unidad de análisis de protestas laborales del WLG no se restringe a las huelgas, Korzeniewicz señala que coinciden el pico máximo de protestas y el de huelgas registradas por la serie del Ministerio de Trabajo mencionada anteriormente. Esto indicaría que las huelgas fueron la forma predominante de protesta en los años referidos. Pero también podría indicar que en los picos de protesta se combinan formas huelguísticas con formas no huelguísticas de protesta. En cualquier caso, veremos que

¹ En el largo plazo, la Argentina fue receptora creciente de inversiones en el sector automotriz, y en la participación de la producción mundial, hasta mediados de los 1970. Posteriormente la expansión de la producción giró decisivamente hacia los países asiáticos, e incluyendo a Sudáfrica como país productor. En América Latina, el puesto de la Argentina lo tomaron México y Brasil.

las formas de protesta laboral no huelguísticas se diferenciarán particularmente desde los años 90. La evolución de la protesta delineada aquí apoya algunas interpretaciones en debate en el campo de la historia del movimiento obrero reciente. Nos referimos a la tesis de James (1990) que afirma que luego del derrocamiento de Perón en 1955 el movimiento obrero atravesó dos etapas. En un primer momento los trabajadores y sus organizaciones habrían resistido en forma combativa la exclusión política y social de los gobiernos antiperonistas. Pero luego de un período de activa resistencia, las organizaciones consolidaron sus posiciones en sucesivas negociaciones con el régimen dando lugar a una nueva integración institucional, con la consolidación de una capa burocrática de nueva generación de dirigentes (identificada con el vanguardismo) y desmovilizando consecuentemente a los trabajadores. Este relato fue criticado por quienes consideran que oscurece las movilizaciones posteriores que condujeron al ciclo de luchas de los años 1970 (Schneider 2005). Aceptando los datos del WLG para la Argentina de los setentas, esta discusión puede tomar la diferenciación entre acciones rutinarias y transgresora señalada por Silver (2005, p. 210). En este sentido, más allá de su cantidad, las acciones de 1969-1975 fueron diferentes por su forma (mayor violencia) y sus reivindicaciones potencialmente revolucionarias dadas por la difusión de ideologías revolucionarias como por las alianzas creadas en la situación política que unificaron a las fracciones revolucionarias con la mayoría del movimiento obrero excluido políticamente².

Avanzando en el tiempo, la serie del WLG minimiza el reanimamiento de la actividad huelguística desde la apertura constitucional de 1983 en adelante. Como se observa McGuire en sus datos, la actividad huelguística en los 80 es significativa si se mira la cantidad de huelguistas además de la cantidad de huelgas.

En el año 1986 hubo 582 huelgas con aproximadamente 11 millones de huelguistas. Si bien no se pueden comparar las bases de información con la estadística de huelgas de 1907-1972, por cuanto éstas refieren a la Capital Federal solamente, aún así se pueden realizar algunos cruces de datos básicos. En 1959 hubo 1.411.062 huelguistas en 45 huelgas, con casi 10 millones de días perdidos en la Capital Federal. A juzgar por la tasa de habitantes por huelguista en ambos momentos y lugares, la ola huelguística de 1986 fue apenas menor que la de 1959. En la Capital Federal en 1959 hubo 1 huelguista

² Esta dinámica se dio en la fase 1969-1972, ver Santella 2008.

por cada 2,1 habitantes; en el territorio argentino en 1986 hubo 1 huelguista cada 2,48 habitantes³.

Esta comparación tiene varias limitaciones. El registro de 1986 abarca distintas formas de paralización del trabajo, mientras que la de 1959 se acota a las huelgas completas (no incluye las interrupciones parciales o intermitentes de una jornada). Sin embargo, no deja de llamar la atención sobre la intensidad de un ciclo huelguístico en los años 1980 poco tomado en cuenta en el registro de WLG (que indicaba casi 70 menciones de protesta laboral en 1959 frente a 15 en 1986). Otra diferencia es que la base de WLG abarca todas las formas de protesta de trabajadores sin limitarse a las huelgas. Dar cuenta de las similitudes y diferencias de ambos ciclos de lucha, reflejadas en los registros cuantitativos, implicaría un estudio comparativo en profundidad no realizado. Este podría iluminar sobre las características internas de la protesta (relación entre formas huelguísticas y no huelguísticas) así como de las relaciones en el contexto económico y político en que se inscribieron las acciones de protesta. Un indicador que brindan los registros es la mayor concentración de las acciones huelguísticas de 1959, en comparación con 1986, lo cual podría explicar parcialmente la mayor visibilidad y repercusión de las primeras. En 1959 se observaron 31.356 huelguistas por huelga, frente a 19.307 huelguistas por huelga en 1986. En otro aspecto, en 1986 son mayores los días laborales perdidos por las huelgas, que en 1959. Esto indica que en el pico de 1959 las huelgas fueron más concentradas (cada huelga agrupó más trabajadores) que en el pico de 1986. Conjeturalmente, estos rasgos ayudan a que la fuente de WLG capte en menor medida el ciclo de 1986 frente al de 1959. Las huelgas de 1986 estuvieron dispersas en el territorio nacional mientras que las de 1959 fueron más concentradas y realizadas en la Capital Federal. Podemos pensar que es difícil que los dos diarios usados por el WLG (diarios principales de capitales de EE. UU. y UK) registren movimientos pequeños realizados en las provincias de los países extranjeros.

Las protestas en el período

Más difícil es ponderar en términos histórico comparativos la magnitud de la movilización popular de protesta que se configura con características nuevas una vez

³ Las comparaciones más usuales refieren a huelguistas por trabajadores asalariados (por ej., MTEySS 2006), pero no disponemos de este número para la Capital Federal en el Censo Nacional de Población de 1960 usado para realizar estos cálculos.

que irrumpe la desocupación de los 90. Los registros para estos años dan cuenta de la modificación de la composición de la protesta pero no han producido indicadores de personas movilizadas. Sin embargo, han proliferado estudios (con matrices teóricas diferentes) que cubren mayormente el período.

A partir del material disponible se puede afirmar que los años 90 muestran un período de alta movilización social que da cuenta de los cambios fuertes en la estructura social y las relaciones de fuerzas sociales que se remontan desde los años 70 profundizadas a comienzos de la década. A medida que avanzaron las reformas en el estado y en el trabajo, afectando a los diferentes sectores de los trabajadores (ocupados y desocupados), la protesta globalmente creció de magnitud, dando lugar a la protesta callejera y culminando, con la aglutinación de distintas fracciones sociales afectadas (no sólo la clase trabajadora) en los hechos de protesta de diciembre de 2001. En el fondo de la crisis recesiva en 2002, los movimientos de desocupados y de los ahorristas afectados por el “corralito” fueron quienes ganaron la calle. Esta movilización fue diluyéndose por la apertura política de un gobierno favorable (por lo menos en el plano del discurso y la identificación política) a los sectores movilizados en los años “menemistas” (entre los desocupados y el movimiento obrero), por la gradual y parcial devolución de los ahorros, por el reinicio de la actividad económica que repercutirá finalmente en el mercado de trabajo aliviando las tasas de desocupación y, no menos importante, por la masiva distribución de planes sociales erigida como una política del estado dirigida a contener la situación extrema. Poco después, la recuperación del mercado de trabajo dará lugar a una ola huelguística, con características propias y cuya intensidad será objeto de discusión (ver Svampa 2008, pp. 203-204).

Las políticas de reestructuración del estado y las empresas generaron, en distintos tiempos y formas, considerables resistencias por parte de los afectados por las mismas. En algunos casos esta resistencia impidió la realización completa de las reformas planeadas (en el caso de las reformas laborales y sindicales, ver Murillo 2005, Iñigo Carrera, 2004). Tomamos el período de protesta que comienza en 1989, momento en que asume un gobierno que se propone, más claramente que el anterior, llevar adelante este tipo de cambios. En un primer momento (1989-1993) se combinan una fuerte resistencia huelguística junto con los saqueos de 1989, que en cierta medida prefiguran el nuevo tipo de protestas por fuera de las estructuras del movimiento

obrero⁴. Como se ve en el cuadro elaborado por McGuire, los años 1989-1990 evidencian un extenso movimiento huelguístico. Por la cantidad de huelguistas y días perdidos, pueden compararse al pico de 1986 (con lo que, por las consideraciones hechas antes, también se compara con el pico de 1959). Estas huelgas se dieron en un contexto defensivo, especialmente en relación con los trabajadores estatales. En esta ola de huelgas preponderaron los trabajadores del sector público, como se observa en la distribución de los días perdidos por huelgas (92 y 95% de los días, alrededor del 80% de los huelguistas y de las huelgas). Esto contrasta con la composición del inicio de la serie (1984) cuando las huelgas en el sector público representaban la mitad del total.

Entre los sectores que más participan de estos años de huelgas, se encuentran los docentes (con 179 huelgas entre 1989 y 1993, con 7.329.966 huelguistas), los empleados de la administración pública (160, 6.436.481), sin incluir a los municipales (con 58 huelgas, 656.030 huelguistas), los trabajadores telefónicos (37 huelgas con 289.600 huelguistas) y los ferroviarios (36 huelgas, 428.250 huelguistas). Los trabajadores de Luz y Fuerza implementaron 6 huelgas, casi exclusivamente por parte del sindicato de Mar del Plata, de orientación opositora a la Federación nacional. De las 7 huelgas de sindicatos de este gremio entre 1989 y 1993, 5 la realizaron en Mar del Plata, mientras las restantes corrieron a cargo de los sindicatos de Córdoba y Tucumán (15.500). Los petroleros, quienes pertenecieran a empresas sujetas a privatización, realizaron 8 huelgas entre 1989 y 1991, con 54.820 huelguistas. Los trabajadores de Correos participaron en 5 huelgas, aunque muy masivas ya que fueron declaradas por la Federación, convocando entre todas a 140.000 trabajadores⁵. Entre los trabajadores privados (en algunos gremios, organizados junto a trabajadores estatales), se destacan Sanidad con 81 huelgas y 1.141.890 huelguistas; los Bancarios realizaron 27 huelgas con 292.450 huelguistas. Sin embargo, el gremio privado e industrial con mayor intensidad huelguística fue la Unión Obrera Metalúrgica con 49 huelgas y 6.573.960 huelguistas entre 1989 y 1993. De carácter centralizado, una menor cantidad de huelgas aquí incluyó una mayor cantidad de huelguistas. En este lapso la UOM convocó a 20 huelgas nacionales (tan sólo una a nivel seccional, en Campana en diciembre de 1989).

⁴ Más bien, los “saqueos” de 1989-1990 se repitieron las semanas previas a la protesta nacional del 19 y 20 de diciembre de 2001. En 1989 se produjeron 282 saqueos y 71 en 1990. Estos saqueos consistían en “grupos de personas que se apoderan violentamente” de alimentos (39% del total) más otros medios de consumo necesario (35%). Los hechos tuvieron alcance nacional. Los autores de la investigación concluyen que, más que protestas, fueron acciones dirigidas contra comerciantes para la satisfacción inmediata de necesidades (Iñigo Carrera, Cotarelo, Gómez y Kindgard, 1995).

⁵ Todos estos datos fueron elaborados a partir de la base construida por McGuire de Huelgas 1984-1993.

Las restantes 28 huelgas del sector fueron a nivel de plantas (con 18.340 huelguistas). La participación de la UOM en el movimiento de huelgas ha sido rescatada por algunos analistas como muestra de una importante diferenciación entre los gremios industriales en relación a las políticas de gobierno en la primera etapa del gobierno de Menem⁶. La participación de este gremio no deja de ser significativa, ya que representan el 25% de los huelguistas en esta etapa (1989-1993). Al mismo tiempo, si comparamos la frecuencia de huelgas del gremio desde 1984 se comprueba que se mantuvo o incluso incrementó en el período 1989-1993. El total de huelgas metalúrgicas entre 1984-1993 fue de 158 con 9.477.664 huelguistas, sobre un total de 64.828.080 en las 3401 para el conjunto de los gremios en el mismo lapso (aproximadamente el 4% de las huelgas y 14% de huelguistas). Esta participación asciende al 25% de los huelguistas y el 4% de las huelgas. Tan solo en 1992 la UOM hizo 9 huelgas nacionales, lo que explicaría una distribución de huelguistas a favor del sector privado que contrasta significativamente respecto de la media del período. En 1992 solamente el 37% de los huelguistas correspondieron a trabajadores públicos o de sectores mixtos, un porcentaje que contrasta con el 77% de 1991 o el 83% de 1993.

Podemos señalar, retomando lo anterior, una dinámica particular de los trabajadores metalúrgicos, en el sentido de que mostraron una respuesta activa en la primera etapa menemista, discrepante a la subordinación de la mayor parte de los gremios industriales. Pero además es significativa la forma en que produjeron huelgas metalúrgicas a partir de 1989. La diferencia reside en que desde este año las huelgas adquieren un carácter nacional y centralizado desde el Secretariado Nacional. En este sentido, la intensa actividad huelguística en la rama metalúrgica adelanta una dinámica en el sector industrial en la que las medidas de fuerza, declinantes en su conjunto, son difícilmente realizadas a nivel fabril (salvo en casos extremos de despidos o cierres, pero aún así

⁶ Las investigaciones reunidas en la publicación Carta Económica señalaban al gremio metalúrgico como uno de los más combativos durante la primera etapa menemista. Entre 1985 y 1991, la UOM figura como el tercer sindicato en cuanto a “conflictos laborales” (4,4%), siguiendo a Docentes (21%) y Estatales (18%) (datos basados en Centro de Estudios para la Nueva Mayoría). Los analistas concluyen que “mientras que la conflictividad laboral traducida en medidas de fuerza ha disminuido en el promedio general, en el caso particular de la UOM se ha incrementado, duplicándose durante el gobierno de Menem respecto del de Alfonsín. Esto respondería a varias causas: 1) El modelo de apertura y transformación de la economía, 2) Los conflictos que han tenido en las plantas más importantes del gremio por la reducción de personal, como es el caso de Somisa y Acindar, 3) La posición política de la UOM que está en oposición al modelo laboral, de desregulación de las obras sociales, paritarias por empresas y democratización de la vida sindical”. Carta Económica, Febrero de 1992.

difíciles de convocar, como veremos en el sector automotriz)⁷. La participación huelguística de los trabajadores industriales en el nuevo contexto desfavorable de fuerzas (desde fines de los 80) se reducirá a las medidas convocadas desde las centrales generales o los sindicatos de rama. Esta forma de participación ha sido menos tenida en cuenta en los análisis del período. Sin embargo, adquiere una importancia mayor que en los otros períodos precisamente por la pronunciada caída de la frecuencia de las huelgas realizadas en las instancias de base, locales o regionales. La dificultad de expresar reclamos por la vía huelguística de empresas o regiones también fue parcialmente canalizada por formas de protesta por fuera del lugar de trabajo, en el caso de las tradicionales manifestaciones, o crecientemente implementados los cortes de ruta. Estos últimos permitieron la aparición contestataria de la fracción de los trabajadores más afectadas por el proceso económico (los despedidos por la reconversión industrial y las privatizaciones). Pero también los cortes de ruta fueron extensivamente utilizados por fracciones de trabajadores ocupados, y en ciertas ocasiones se combinaron en acciones conjuntas entre los trabajadores organizados por los sindicatos y los movimientos de desocupados (como en las huelgas generales de 1997 y 2000, ver Auyero 2002).

El cambio en las formas de protesta popular predominantes comienza a evidenciarse con la caída del ciclo huelguístico de 1989-1990 pero se efectiviza hacia 1994-1995. Según el estudio del GESPAC (Schuster et al 2006) entre 1989 y 1995 los actores sindicales promueven la mayor parte de las protestas, siendo luego reemplazados por “actores civiles” (entre los cuales el 28% corresponde a vecinos, 20% a estudiantes, 11% a Derechos Humanos, 9% a Familiares y Amigos de Víctimas, etc.) hasta 1999. Desde aquí nuevamente los sindicatos retoman el liderazgo de la protesta hasta 2001 (Gráfico 7, Evolución de la protesta según tipo de organización).

El cambio en la protesta se observa más en cuanto a las formas de acción, denominados “formatos” por los investigadores de GESPAC. Los paros son mayoritarios entre 1989 y 1990, pero desde entonces son reemplazados por las manifestaciones⁸. Estas son predominantes en todo el resto del período tomado por el estudio (1989-2002), pero los cortes de ruta crecen vertiginosamente desde 1996 hasta casi igualarse a la cantidad de manifestaciones en 2001. Las tomas adquieren poca

⁷ Estas huelgas nacionales se dan en un contexto en que la CGT se debate entre las fracciones subordinadas al gobierno y las fracciones combativas (ubaldinismo). Hasta 1992 la central no realizó ninguna huelga general.

⁸ En términos generales coincide con los datos de PIMSA para 1994-2006. Entre 1994-1995 alrededor del 25% del total de protestas son paros, relación que disminuye posteriormente y se incrementa en 2004 al 16%, el 21% en 2005 y 13% en 2006 (Iñigo Carrera 2007, p. 73).

frecuencia en todo el período. Sin embargo, como realza Armelino (2005), las protestas sindicales y sus demandas son las predominantes en todo el período 1989-2002. En este lapso las organizaciones sindicales convocan al 49% de la protesta, seguido del 35% protagonizada por organizaciones civiles y más lejos por movimientos piqueteros (6%) (Gráfico 4, Schuster 2006). Asimismo las demandas salariales, típicamente sindicales, corresponden al 26% de las demandas del conjunto de las protestas (Gráfico 5). La declinación de la protesta sindical se observa especialmente en cuanto a las huelgas, ya que las manifestaciones son mayoritarias (45%) frente a los paros (24%). Pero las manifestaciones son igualmente usadas por sindicatos (34%) como por las “organizaciones civiles” (40%). Lo mismo hay que señalar para los cortes de ruta, sin dudas uno de los formatos que diferencian al período de los anteriores. Estos fueron realizados tanto por sindicatos (en un 25% de los cortes) como por organizaciones civiles (24%) o piqueteras (30%) (Tabla 8). Esto es, los cortes de ruta se convirtieron en una forma “modular” en el sentido de que fue adaptada por sujetos y demandas distintas, no reducible a la forma de expresión de los desocupados⁹. Por el momento de difusión (en el contexto de la crisis y la desocupación) se la asocia usualmente a los desocupados¹⁰. Aunque haya sido impulsada probablemente como medio específico de éstos, una vez instalada en la escena pública parece haber sido tomada y generalizada como medio de acción para cualquier otro reclamo.

A la luz de este contexto defensivo para la clase trabajadora, se observan transformaciones en el análisis interno de la protesta laboral. Siguiendo la tendencia comenzada a fines de los 80 (ver cuadro), desde 1990 hasta 2005 la protesta laboral será protagonizada por los trabajadores del sector público (docentes, administración pública nacional y municipal) (Armelino 2005, p. 6). Entre 1994-2006 PIMSA registró 2033 huelgas, de las cuales el 68% (1391) correspondieron a trabajadores del sector público y 26% (537) al sector privado (el resto correspondieron a huelgas en sectores mixtos).

⁹ Aunque es mucho más difícil, con el “paro” puede suceder lo mismo, aunque en el período 1989-2002 tan sólo el 8% de paros correspondió a protestas por actores no sindicales. Un ejemplo de este tipo de “modularidad” (en referencia a una forma de acción que no es privativa de un sujeto dado en la estructura social) se encuentra en el “paro agrario” de marzo a julio de 2008. Aunque parte del debate entre los actores enfrentados pasara por como caracterizan el tipo de protesta (para el gobierno se trataba de un lock-out) la misma se identificó desde su inicio como un “paro”. Para la discusión sobre la diferencia entre huelga y lock-out y su tratamiento por la OIT, ver Van der Velden 2007. Este tipo de situación (en que una misma forma de acción es usada por sujetos muy distintos) nos presenta las limitaciones en una consideración externa de las formas de la protesta, sin tener en cuenta los sujetos sociales, sus objetivos y el contexto en que se producen.

¹⁰ Aunque habría que tener en cuenta que se pueden encontrar cortes de ruta o caminos como formas de protestas usadas por campesinos o productores agropecuarios desde principios de siglo en nuestro país.

Tampoco la revitalización de las huelgas en 2005-2006 parece corresponder a la irrupción de los trabajadores del sector privado. Los trabajadores públicos protagonizaron el 84% de las huelgas de 2005 y el 63% de las huelgas de 2006 (calculado en base a Iñigo Carrera 2007, p. 75). Dentro de este marco, las huelgas en la industria manufacturera son aún menos frecuentes. Representan el 8% de las huelgas de 1994-2006, el 10% en 2005 y el 11% en 2006.

Papel e implicaciones de las huelgas generales

Sin embargo, hay que dar cuenta de una serie de limitaciones de los análisis cuantitativos sobre protesta en relación al tipo de datos hasta aquí reproducidos. Como señala tanto la bibliografía establecida sobre huelgas, y se amplía en una discusión sobre los ciclos de lucha realizada recientemente por Iñigo Carrera (2007), el uso de frecuencias de acciones puede mostrar un panorama limitado de las movilizaciones y las relaciones de lucha en el tiempo. Este señalamiento plantea la vinculación de las series simples de frecuencias de protestas con un análisis más complejo que incluya otras variables propias de las acciones de protesta, como aquellas que surgen de las relaciones de fuerza en que se inscriben y sobre las que actúan las acciones¹¹.

Una de las modificaciones centrales en la actividad de protesta sindical, es que mientras que las huelgas “ordinarias” (así caracterizadas por McGuire como aquellas que no son generales) disminuyen significativamente desde 1991 hasta 2003, no ocurre lo mismo con las huelgas generales. Las huelgas generales tuvieron menor frecuencia desde 1989 que respecto al período 1983-1989 (lo que se pone de relieve al recordar los “13 paros de la CGT a Alfonsín”). Sin embargo, esta disminución entre períodos es relativa a la situación de cada período, para lo cual hay que tener en cuenta el contexto de fuerzas especialmente desfavorable para los trabajadores a partir de las reformas

¹¹ Algunos autores diferencian “dimensiones internas o externas” de las protestas. Entre las primeras podemos mencionar el grado de organización de las protestas (espontáneas o convocadas y planeadas por organizaciones específicas burocráticas), relaciones entre las organizaciones que representan al sujeto social de la protesta, nivel de participación (cantidad de personas movilizadas), formas de acción usadas (desde marchas, huelgas, actos, meetings, acampadas, cortes de ruta). Entre las dimensiones externas se cuentan las relaciones de alianzas de quienes protestas con otros sujetos, las cuales también son atravesadas por la *simpatía espontánea o difusa*, o el apoyo directo material y político de organizaciones sociales o estatales (partidos políticos, niveles de la administración pública). Siguiendo con las dimensiones externas, las alianzas pueden dar lugar a acciones contrarias que influyen decisivamente en el transcurso de la lucha, en el caso de la represión del estado, o de cualquier adversario definido al nivel social (en el caso de una huelga con violencia de grupos financiados por las patronales o del mismo sindicato contra los huelguistas).

estatales y económicas aplicadas desde 1989. Por otro lado, fueron realizadas bajo gobiernos identificados con su mismo partido político, lo cual hace más difícil esta decisión¹².

Entre 1992 y 2002 para el conjunto de trabajadores la participación mayoritaria en protestas se ha reducido a las huelgas generales. Este hecho ha sido poco tenido en cuenta por los analistas de protestas del período, y su explicación de este hecho puede responder a un proceso que tiene efectos similares tanto en los análisis políticos de los especialistas, como en los trabajadores que participan de estos “paros de la CGT”.

Mayormente el registro de los paros generales se limita a las motivaciones y especulaciones de los dirigentes en defensa de intereses de organización, autónomos u opuestos a los trabajadores. La observación usual acerca de los paros generales se desplaza así recurrentemente a la actividad reducida de grupo de presión de la capa de los dirigentes, por medio de la cual instrumentalizan a los trabajadores en la búsqueda de objetivos propios. La aceptación de una fracción del movimiento obrero a las reformas neoliberales ha desdibujado y oscurecido el momento en que otras fracciones (inclusive éstas mismas) han expresado su discrepancia, global o parcial, o la resistencia a estas reformas. Esto tampoco ha sido observado por la identificación tradicional del gobierno y los trabajadores con el peronismo.

Sin embargo, la dinámica de lucha de las “reformas de mercado”, contiene la influencia del movimiento obrero a través del uso de la huelga general como instrumento de presión, resistencia u oposición, dependiendo del contexto y la fracción y alianza que convoca a los mismos. Se ha identificado la primera huelga general del período (1992) con la negociación instrumental por las obras sociales, pero las restantes huelgas del período son más difícilmente reducibles a negociaciones relativas a fondos sindicales. Los paros generales convocados conjuntamente por la CGT, MTA o CTA, comprendieron diversos reclamos económicos y políticos que excedieron las demandas de recursos para el financiamiento de los aparatos sindicales.

En este sentido, las huelgas se han desempeñado como “articuladores de la protesta”, unificando la contestación de fracciones obreras y sociales no obreras, así como movimientos de protesta política. Como ilustra Auyero (2002), “quizás sean las

¹² Bajo el gobierno radical de 1984-1989 hubo 2 huelgas generales por año, en los 10 años de gobiernos justicialistas (1989-1999) 0,9 huelgas por año. “Pero esta comparación poco dice si no se tiene presente que desde hace cincuenta años la mayoría del movimiento obrero ha formado parte de la alianza social que se expresa políticamente en el peronismo. Este hecho hace que haya una diferencia cualitativa entre las huelgas generales realizadas durante una administración radical o justicialista; más aún si son declaradas contra políticas de gobierno” (Iñigo Carrera 1999, p. 159).

huelgas de 1997 (agosto) y 2000 (junio), llevadas a cabo durante los gobiernos de los presidentes Menem y De la Rúa, las que mejor grafiquen esta coexistencia de formas establecidas de protesta con otras emergentes. El paro general del 97 combinó cortes de ruta, ollas populares, manifestaciones y piquetes de huelga en todo el país. El de 2000 incluyó cortes de puente (Misiones y Capital Federal), de ruta (Jujuy y Chubut), de vías ferroviarias (Castelar, provincia de Buenos Aires), ataques a oficinas de Repsol-YPF (Neuquén), del Citibank (Santa Fe y San Juan), pedradas contra edificios públicos (Secretaría de Educación de Neuquén) y bloqueos a destilerías (Ensenada, Provincia de Buenos Aires)” (p. 193). Para el autor citado, estos ejemplos muestran que no debe presuponerse una “falsa dicotomía” entre los cortes de ruta y las huelgas.

Entre 1992 y 2002 se cumplieron 19 huelgas generales. 14 de ellas fueron convocadas por la CGT o por una de sus fracciones identificadas con la CGT (sea CGT Moyano o Daer) y apoyadas por las otras centrales, las restantes convocadas conjuntamente por CTA y/o MTA (Moyano), también secundadas por la CCC y la UOM. Por lo menos 11 de ellas fueron convocadas explícitamente “contra el modelo económico”, las otras contra aspectos específicos de políticas de estado, o en la defensa de intereses específicos de los trabajadores (contra el desempleo, desde 1995; contra la flexibilización laboral, contra la reducción salarial de los empleados estatales en 2001, contra la bancarización y el corralito). La huelga del 20 de diciembre se plegó al movimiento de protesta del día anterior y se sumó con el reclamo del levantamiento del estado de sitio que había decretado el Presidente De la Rúa¹³.

El análisis de las huelgas generales adquiere distintas implicaciones.

a) Su inclusión modifica los valores de una “presentación estilizada” de los hechos cuantificables de la protesta social. Los anteriores relatos se basaron en unidades de protesta discreta que equiparaban un corte de ruta de 30 desocupados o vecinos, quizás realizado en unas horas, con una huelga general que paraliza parte o la totalidad de la actividad económica nacional por un día en la cual participan millones de trabajadores. Los registros sobre protestas no contienen cantidades de personas movilizadas. La estadística reciente de huelgas disponible contiene cantidad de huelguistas sólo en 1984-

¹³ Entre 1994 y 2006 hubo 56 huelgas generales contando, además de las nacionales, las de orden local (Iñigo Carrera 2007, p. 74). Entre 1989 y 1993 hubo 8 huelgas generales provinciales convocadas por la CGT (Salta, Trelew, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Jujuy, Santa Cruz, Jujuy) y la primera nacional del período. En base a McGuire, Huelgas 1984-1993. En total, hubo entre 1989-2006 64 huelgas generales nacionales y locales.

1993 y 2005-2006 (MTEySS, 2007). Las huelgas generales no se incluyen en la estadística, pero su inclusión atemperaría la caída de la intensidad huelguística.

La magnitud e intensidad de la protesta depende (“internamente”) de la convergencia y unidad de las organizaciones que constituyen una misma base de movilización. En el caso de las huelgas generales, tomando en cuenta la fragmentación de la CGT en tres centrales, la capacidad de convocatoria fue afectada por el grado de unidad interna o división que mostraron estos nucleamientos a lo largo de las distintas acciones de fuerza.

b) Otra implicación, vinculada a la “articulación de la protesta”, se refiere al modo en que los paros generales se engarzaron en la protesta popular más general, lo cual remite a la instrumentalización de las mismas por otros sectores sociales y políticos.

c) Lo anterior se vincula con la capacidad que los convocantes tengan de concitar solidaridad implícita o explícita a sus medidas de fuerza. La misma depende, como vemos en el punto anterior, de la necesidad de otros sectores sociales de expresar sus reclamos, pero se articula en tanto la convocatoria reconozca un conjunto de intereses y situaciones más amplias a las específicas del movimiento obrero (sea por cuestiones de organización o diversos aspectos de la situación asalariada). Una parte sustancial del análisis de las protestas pasa por cuales y qué peso tengan las alianzas y el apoyo social manifestado en cada uno de los eventos de protesta (paros generales).

d) Las huelgas generales como eventos específicos de protesta deben diferenciarse del “sindicalismo” como organización permanente. Esto remite a una diferencia entre acción y organización. El acto de protesta adquiere su adhesión dependiendo de cada situación, más allá de la adhesión permanente a los sindicatos o sus direcciones sindicales, sea de las bases afiliadas o de otros sectores sociales¹⁴.

En 1995 y 1996 se incrementó la movilización centrada en las huelgas generales. Esto fue producto de una convergencia entre las fracciones sindicales. La CGT oficialista, que no había participado de los paros de 1994 y 1995 anteriores realizados por MTA y CTA, fue empujada hacia la confrontación por las mismas políticas de gobierno (la continuidad de las reformas laborales, la duplicación de las tasas de desocupación, el congelamiento de los salarios). La situación global empujó a las

¹⁴ Esto no debe llevar a minusvalorar la condición de la organización para el despliegue de protestas masivas, más aún en el caso de las huelgas con movilizaciones. Este punto se refiere a que la participación en una acción puede no repetirse como participación en la organización. Pero la cuestión de cómo determinadas organizaciones posibilitan la aparición y realización de movilizaciones es en el caso que estamos analizando (sindicatos y huelgas generales en el período) de fundamental importancia. Nos detendremos en ello más adelante.

fracciones oficialistas a la protesta activa, unificándola con las fracciones más combativas del movimiento obrero. También se sumaron otros movimientos sociales, organizaciones y partidos políticos de oposición. Las paralizaciones masivas del trabajo fueron acompañadas por concentraciones públicas igualmente masivas.

Una serie de estudios de opinión pública revelan aspectos sobre la situación en que estas acciones adquieren un significado específico, ilustrando los anteriores puntos sobre las implicaciones de las huelgas generales, en sus dimensiones internas o externas. Hacia 1995 el impacto de las reformas económicas sobre la ocupación se convirtió en un tema de preocupación prioritaria en la población. Encuestas de Diciembre de 1994 señalaban los salarios como el tema de mayor preocupación (los bajos salarios son para el 21% de los encuestados un problema prioritario) cercano a la desocupación (para 19% de los encuestados). La muestra, realizada en Capital Federal y AMBA, señala que la desocupación preocupaba más en el AMBA (23%). Le seguían los temas de la corrupción administrativa (16%), educación (13%) y delincuencia (9%). En Diciembre de 1996, sin embargo, la desocupación se había convertido en la principal preocupación, “el 32% dice que el empleo es el principal problema a resolver, el 23% cree que es la corrupción, el 10% la justicia, otro 10% la educación y el 9% los salarios” (Carta Económica, Enero 1997). Es llamativo como, entre 1994 y 1996, se desplaza la cuestión salarial por la urgencia del empleo.

Entre 1995 y 1996 cayó drásticamente la imagen positiva del gobierno de Menem. Hasta mediados del 1995 la imagen positiva alcanzaba más del 40%, cifra que desciende al 20% un año después (Carta Económica, Agosto 1996). La “política económica” y “privatizaciones” tienen en 1996 un nivel muy bajo de aceptación (8% y 5%). Las privatizaciones un año antes todavía eran vistas favorablemente por más del 25% de los consultados. Según un sondeo de septiembre de 1995 realizado en Capital y AMBA en torno a los medios para resolver el “problema del desempleo”, para la mayoría de los encuestados el “crecimiento económico” fue la solución más aceptada (75%), opinión compartida por el 61% para los trabajadores en relación de dependencia. Estos últimos señalaron muy distantes al “reentrenamiento laboral” (12%) o subsidio de desempleo (10%). En último lugar se mencionan a los “paros y/o movilizaciones” como medio de resolución (3,9%). El contraste se encuentra en un sondeo realizado para medir el grado de aceptación de las medidas que las centrales sindicales comenzaron a implementar a comienzos del segundo mandato de Menem (1995-1999). Se realizó un sondeo durante la última semana de agosto sobre si “esta de acuerdo” con la

movilización convocada por la CGT para el 6 de septiembre. El resultado señala que “predomina una imagen adversa en la opinión pública sobre la jornada de protesta convocada por la CGT. De acuerdo al estudio el 48% responde no estar de acuerdo con la jornada de protesta, el 38% contesta que sí lo está y el 14% contesta no saber”. Llamaron la atención de los analistas la vinculación ligeramente más favorable a la protesta entre los habitantes de la Capital Federal (47% contra 33% de simpatizantes de la protesta en AMBA), los desocupados (45% contra 37% de simpatizantes entre los ocupados) y los votantes a Bordón (46 contra 33% de los votantes a Menem) en las anteriores elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1995 (Carta Económica, septiembre de 1995).

Si bien los analistas de Carta Económica destacan que los simpatizantes de la protesta son minoritarios, el dato puede tomar otra significación frente a la más baja imagen del sindicalismo. La protesta (huelga con movilización) convocada por las centrales obtuvo una adhesión mucho más alta que la adhesión al “sindicalismo” en general, fuera del contexto de esta confrontación. La adhesión a la protesta, por otro lado, se amplió a sectores de la clase media (como se puede ver en el contraste de lugar de vivienda y opción electoral). Estos sondeos coinciden con la adhesión que “por arriba” emitieran las organizaciones sociales y políticas de los pequeños empresarios y los partidos de oposición. La imagen rutinaria de los sindicalistas en los sondeos de opinión pública es mucho menor a la adhesión a la movilización de septiembre de 1995. En noviembre de 1989 un sondeo Lynch Menendez mostraba que Ubaldini tenía una imagen positiva de 28% de los encuestados, contra el 38% de imagen negativa (28% regular). Meses atrás su imagen era más positiva que negativa. Pero esto contrastaba principalmente con el 27% de imagen negativa de Andreoni (sindicalista participacionista diferenciado del Ubaldini combativo), 8% de imagen positiva y 45% que “no sabe/no contesta” (respuesta que no era significativa para Ubaldini). Esto marca no solo la “popularidad” de éste último sino el grado de simpatía, así como de rechazo de otro grupo de la población, frente a la falta de simpatía o conocimiento del dirigente de los participacionistas.

En estos sondeos encontramos aquellos sobre “imagen del sindicalismo”, esto es, ya no referido a dirigentes en particular sino a las organizaciones como tales. Aquí la simpatía es mínima, oscurecida por el rechazo de la mayor parte de los encuestados. En diciembre de 1990, el 10% se manifestó positivamente frente al 56% que lo hiciera negativamente. A principios de año era un poco mejor la imagen (13%). La imagen de

Ubal dini, que había bajado respecto de 1989, era aproximadamente del doble que la del sindicalismo. En 2001 la imagen negativa del sindicalismo ascendía al 71% de los encuestados, contra el 5% positiva (en Capital y AMBA, Carta Económica, Junio 2001). Entre una lista de “factores de poder” los encuestados situaron a los sindicatos en los últimos lugares (5%) detrás de la Iglesia (45%), Medios de Comunicación (44%), FFAA (21%), Empresariado (8%), Congreso (6%) y Partidos Políticos (4%). La imagen negativa de los sindicatos no se revierte significativamente según variables como educación, lugar de vivienda, nivel socioeconómico (lo que indicaría situaciones objetiva de clase) o edad. Para 2001 había empeorado respecto 1999 (10%); la tendencia se mantuvo hacia 2004.

En suma, retomando este conjunto de sondeos a lo largo de los años 90, comparándolos con el realizado al momento del paro y movilización de septiembre de 1995, podemos apoyar las consideraciones previas sobre la dinámica y las implicancias de las huelgas generales en el período. Los paros funcionan como “articuladores de la protesta” en tanto mediación del descontento de otros sectores sociales, creado por situaciones económicas que afectan en conjunto a fracciones sociales más amplias que las de los asalariados. Hacia 1995 el desempleo se convirtió en un tema de enorme preocupación (desplazando la cuestión salarial en 1996), empujó a la fracción sindical oficialista a unirse a las fracciones disidentes y fuerzas opositoras. En esta coyuntura el gobierno perdió su apoyo de la victoria electoral del 14 de mayo de 1995. El concepto de “articulación de la protesta” se amplía a las corrientes de simpatía popular, no sólo a las adhesiones explícitas en los comunicaciones de las organizaciones y partidos. En estas coyunturas, la adhesión a la protesta convocada por los sindicatos supera significativamente la decreciente simpatía por el “sindicalismo” expresada fuera de estos contextos de lucha.

Hay que mencionar que las movilizaciones que acompañaron los paros generales fueron, aunque menores que las de los años 80, de las más concurridas en comparación con las movilizaciones de los años 90. En la concentración del 6 de septiembre, a la que hicimos referencia en este análisis de opinión pública, se congregaron más de 60.000 personas. Iñigo Carrera (2000) realiza una comparación entre las convocatorias masivas de distinta índole entre 1990 y 1996. Las movilizaciones convocadas por las centrales se encuentran entre las más masivas, junto la del 24 de marzo de 1996 por los 20 años del golpe de Estado de 1976, o la marcha blanca educativa de julio de 1992 (cuadro, p. 168). Esta referencia sobre convocatorias masivas también debe relacionarse con los

problemas de medición de las frecuencias de protesta, los cuales no discriminan la cantidad de personas movilizadas. En este plano, como ocurre con las huelgas generales, las protestas de las centrales sindicales adquieren un peso específico diferencial en el conjunto que se suma a los procesos vinculados con la “articulación de la protesta”. Mirado desde una fracción de trabajadores en particular, como en el caso de los automotrices o los trabajadores industriales en general, la participación en las huelgas generales es más frecuente que la realización de paros dentro de cada rama. Esto puede interpretarse en varios sentidos. Por un lado, cambia la proporción en que las huelgas de rama, de empresa y generales se realizaban en otros períodos históricos (McGuire 1997, Piva 2006). Pero también ilustra el papel que, en el contexto de reflujo de movilización de base, las huelgas generales tuvieron para las organizaciones sindicales, y para la protesta social, en el período 1990-2002.

En la conflictividad laboral en el gobierno peronista de 2003-2006, el movimiento obrero readquirió protagonismo a través de la conflictividad de rama y especialmente las negociaciones colectivas (Atzeni y Ghigliani 2008, Etchemendy y Collier 2007). Además de ser un modo de expresión de la protesta y la oposición política, los paros generales de 1992-2002 se convirtieron en un instrumento de negociación de los sindicatos, cuando el gobierno y las patronales de rama cerraban otros, en el proceso de “reformas neoliberales”. Su uso reiterado a lo largo del período le permitió a los sindicatos mantener ciertas posiciones, a pesar del retroceso en su influencia política. La convocatoria de los paros decidió el bloqueó de gran parte de las reformas de la legislación laboral. Como resultado de este proceso de negociación conflictiva, los sindicatos retuvieron parte de su fuerza organizacional¹⁵. Recíprocamente, esta fuerza organizacional permite entender la capacidad de acatamiento en las huelgas y de convocatoria en las manifestaciones. Los sindicatos pudieron hacer esto porque retuvieron parte de su fuerza organizacional (a pesar de la declinación del nivel de movilización respecto de los anteriores períodos) en las bases laborales. La mayor parte de la bibliografía ha prestado atención a las negociaciones que los sindicatos entablan con los gobiernos para mantener sus recursos de organización derivados de las concesiones estatales en materia de monopolio de afiliación, negociación colectiva y

¹⁵ Distintos trabajos apuntan la capacidad de bloqueo sindical a las reformas. Etchemendy sostiene que “puede argumentarse que el gobierno de Menem no tuvo mucho éxito en la aprobación de los cambios legislativos que disminuirían el poder económico y político de los sindicatos, una base de apoyo tradicional del partido oficialista” (2001, p. 684). En igual sentido pueden citarse a Etchemendy y Palermo 1998, Murillo 2005.

gestión de obras sociales. Esto le otorga ciertos recursos clave en la movilización sindical. Sin embargo, otra parte igualmente importante de los “recursos organizativos” surgen de las relaciones con las bases en torno a los establecimientos. Creemos que estos deben ser tenidos en cuenta al momento de explicar el acatamiento huelguístico y la capacidad de convocatoria a las movilizaciones sindicales.

BIBLIOGRAFIA

- Arrighi, Giovanni y Silver, Beverly, “Workers north and south”, Socialist Register 2001, 2000, pp. 53-76.
- Atzeni, Mauricio y Ghigliani, Pablo, “Nature and limits of trade union’s mobilisations in contemporary Argentina”, en *Labour conflicts in contemporary Argentina*, online publications, IISG.nl, Febrero 2008. 13 pp.
- Auyero, Javier, “Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina”, Desarrollo Económico, vol. 42, No. 166, Buenos Aires, 2002.
- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth Berins, “Down but not out: union resurgence and segmented corporatism in Argentina”, Politics and Society, Vol. 35, No. 3, 2007, pp. 363-401.
- Etchemendy, Sebastián y Palermo, Vicente, “Conflicto y concertación. Gobierno, congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995)”, Desarrollo Económico, Vol. 37, No. 148, 1998, pp. 559-590.
- Iñigo Carrera, Nicolás, “A century of general strikes”, en Van der Velden, Dribbusch y Vandaele (eds), *Strikes around the World, 1968-2005*, Aksant, Ámsterdam, 2007, pp. 61-85.
- , “Fisonomía de las huelgas generales de la década de 1990 (1992-1999)”, PIMSA 1999, Buenos Aires, 2000. pp. 155-173.
- , Cotarelo, Gómez y Kindgard, “La revuelta. Argentina 1989-90”, PIMSA, Documentos de Trabajo, No. 4, Buenos Aires, 1995, 69 pp.
- Frobel, F., Heinrichs J., y Kreye, O., “The new international division of labour”, Social Science Information, Vol. 17, Num. 1, 1978, pp. 123-142.
- Korzeniewicz, Roberto P., “Labor unrest in Argentina, 1906-90”, Review, XVIII, 1995, pp. 105-16.
- McGuire, James W., “The causes of strikes in Argentina, 1984-1991”, Working Papers Series, 049-92, Institute of Industrial Relations, Berkeley, 1992.
- , “Strikes in Argentina: data sources and recent trends”, Latin American Research Review, Vol. 31, No. 3, 1996, pp. 127-150.
- , *Peronism without Peron: Unions, parties and democracy in Argentina*, Standford University Press, Standford, 1997.
- MTEySS, *Estadísticas de conflictos laborales 2006-2007*, Buenos Aires, 2007. 32 pp.
- , Secretaría de Trabajo, Dirección de Regulaciones del Trabajo, *Índice de Conflictividad Potencial*, Buenos Aires, Octubre de 2005, 28 pp.
- , *Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina*, Siglo XXI, Madrid, 2005.
- Piva, Adrian, “El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989-2001)”, Estudios del Trabajo, No. 31, 2006, pp. 23-52.
- Santella, Agustín, “Worker’s mobilization and political violence. Conflict in Villa Constitución, Argentina, 1970-1975”, Latin American Perspectives, Vol. 35, No. 5, 2008, pp. 133-145.
- Schuster, Federico L., et al., *Transformaciones de la protesta social en la Argentina 1989-2003*, Documento de Trabajo No. 48, GEPSAC-IIGG-UBA, Buenos Aires, 2006.
- Silver, Beverly, *Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870*, Akal, Madrid, 2005.
- Svampa, Maristella, *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Siglo XXI, CLACSO, Buenos Aires, 2008.